

Los intereses gremiales abocan a las universidades al inmovilismo - El Mundo - 15/03/2021

Los intereses gremiales abocan a las universidades al inmovilismo

Docentes, estudiantes y colegios profesionales fuerzan a Castells a recular como a Wert

OLGA R. SANMARTÍN MADRID

Manuel Castells llegó al Gobierno hace un año con grandes planes para reformar la universidad. Pero ya ha tenido que recular en sus dos principales medidas –la desfuncionalización del profesorado y la flexibilización de la duración de las carreras– tras el rechazo generado en los campus. La primera se la han frenado los sindicatos. La segunda ha provocado el mismo recelo que en 2015, cuando José Ignacio Wert quiso como él abrir la puerta a los grados de tres años y se le echaron encima.

«Entonces hubo presiones externas e internas», recuerda Juan Hernández Armenteros, profesor de Economía de la Universidad de Málaga. «Estaban los intereses gremiales de los colegios profesionales, ya que reducir los grados de cuatro a tres años equivalía a bajar la categoría profesional del grupo A al B y suponía menos sueldo. Pero también presionaron el profesorado, porque menos créditos suponen menos horas y menos personal, y los estudiantes, que decían que la reforma iba a encarecer el precio de los estudios».

El propio Wert admite, seis años después de esa guerra, que «frente a un alineamiento de docentes y estudiantes hay poco que hacer». El ex ministro del PP había prometido aprobar una nueva ley orgánica de universidades, para sustituir a la de 2007, y hasta encargó a un *comité de sabios* un informe, pero en 2013 se guardó en un cajón. ¿Por qué?

«Encontramos una respuesta gélida de los rectores y negativamente explosiva de los estudiantes. En medio de la enconada batalla que supuso sacar adelante la Lomce, no podíamos abordar una reforma sustancial de la universidad sin apoyos. Lo poco que pudimos hacer fue contra viento y marea. No puede encontrarse caso más claro de intereses corporativos», cuenta Wert.

El Gobierno lleva tres lustros sin modificar la LOU. Aunque hay consenso en la necesidad de acometer reformas de calado, parece complicado llevarlas a término. La presión de los lobbies, por un lado, y la falta de conexión de los ministros con los campus, por otro, abocan al inmovilismo a un sistema donde el principio de autonomía universitaria y la transferencia de las competencias a las CCAA dejan muy poco margen de maniobra a los ministros.

José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la Conferencia de Rectores (Crue), afirma que, «como no haya un diálogo y una búsqueda de acuerdo, es difícil que salga algo adelante en el ámbito universitario». Con Wert las relaciones fueron malas desde el principio y Castells ha redactado sus últimos cambios sin



El ministro de Universidades, Manuel Castells, en el Congreso de los Diputados. BALLESTEROS / EFE

contar con los afectados, así que el panorama tampoco pinta bien.

A ambos se les reprocha que llegaran «con el ideal de las universidades americanas en la cabeza». «Se dieron de bruces con la realidad española, que les reveló que había que hacer las cosas de otra forma, porque las universidades son instituciones de movimientos lentos y hay que dar pasos intermedios antes de grandes cambios», resume Juan José Moreno, catedrático de Lenguajes y Sistemas de la Universidad Politécnica de Madrid y diputado del PSOE en la Asamblea regional.

Moreno, que fue director general de Universidades con Ángel Gabiñondo de ministro, subraya que, cuando en 2011 estuvieron a punto de cerrar un pacto de Estado por la Educación con el PP, el punto de la universidad fue el más fácil de consensuar, porque «es un mundo más técnico y con unas visiones no tan enfrentadas como en la escuela».

Lo que ocurre es que nada puede hacerse de forma unilateral. Y de fondo subyace que «es muy complicado obtener respaldos masivos en

«La dependencia clientelar de los rectores ralentiza los procesos de cambio»

«No hay suficientes mecanismos de control, no se vigila al vigilante»

innovaciones que conllevan más exigencias, rendimientos y controles», en palabras del sociólogo Julio Iglecias de Ussel, que entre 2000 y 2004 fue secretario de Estado de Educación con Pilar del Castillo (PP).

«Cualquier reforma ambiciosa se produce en soledad. Los rectores van a reaccionar en función no de los objetivos de la reforma, sino del clima de respuesta que predomine en sus propios centros. Cuanto más ambiciosos sean los objetivos, más se con-

solidarán las protestas de los afectados. Y la suma de solidaridades parciales en el rechazo generará una dinámica donde los rectores se pondrán a su servicio», analiza.

Considera que a Wert y a Castells les ha pasado lo mismo que al político socialista francés Claude Allègre, a quien, nada más ser nombrado ministro de Educación en 1997, le aconsejaron no hacer nada si quería sobrevivir en el cargo. Ignoró la recomendación y, «al examinar los enormes problemas existentes, emprendió las obligadas reformas», que desencadenaron, tras huelgas y conflictos, su salida del ministerio.

Ramón Caballero, responsable de Universidades de CSIF, defiende que «el verdadero poder no lo tienen los sindicatos, sino las CCAA, que son las que financian el sistema». «Yo he estado en reuniones donde consejeros, especialmente el de Cataluña, le han torcido el brazo a Castells», dice.

Pero el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, habla en *El futuro de la Universidad* de la «dependencia clientelar» de los cargos universitarios elegidos por sufragio

en una comunidad de miles de integrantes, un sistema que genera deficiencias. Porque, a diferencia de los consejos de gobierno de las universidades nórdicas, compuestos por 15 o 20 miembros, los españoles duplican o triplican estas cifras, lo que provoca una «ralentización de los procesos de cambio» y «riesgos de consensos colusorios».

Cada vez hay más voces que denuncian «un mal uso» de la autonomía, que ha convertido la universidad en «una institución corporativista» donde «los rectores tienen un poder absoluto», los miembros de los departamentos se protegen unos a otros y las asociaciones estudiantiles sirven de «canteras de los partidos».

Se sigue evidenciando el entramado clientelar en la Universidad Rey Juan Carlos. Algunos miembros denuncian que, durante el proceso para elegir rector, los profesores han sido obligados a revelar a sus jefes a quién iban a votar. El sistema está or-

14

Años. La LOU de 2001 la reformó la Lomce en 2007. No ha habido más leyes orgánicas. Castells quiere hacer la Lomce.

ganizado de tal forma, aseguran las fuentes, que los candidatos ofrecen prebendas a cambio de respaldo. Sólo así puede explicarse que, después del escándalo de Cristina Cifuentes, quienes más apoyo han logrado en la primera vuelta hayan sido los dos más vinculados a la ex presidenta madrileña. De uno de ellos, el rector Javier Ramos, circulan grabaciones donde admite que quiso comprar a un rival con «dinero», más «profesores», «departamentos» o «espacios».

Hasta los más bienpensantes, aquellos que dicen que la URJC es «un caso aislado», pueden citar a algún director de departamento que bloquea una carrera de forma arbitraria o a un colega que lleva años sin hablar con otro porque su despacho es más grande: ejemplos de «guerras de egos» y «luchas de poder» que se suceden con impunidad.

«El sistema funciona razonablemente bien, y la prueba de ello es el éxito de nuestros egresados por el mundo, pero básicamente por la buena fe de las personas, porque no hay suficientes mecanismos de control. Cuando se producen conflictos no hay herramientas institucionales para solucionarlos», indica José Saturnino Martínez García, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna y director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria.

«Las universidades se vigilan a sí mismas y nadie vigila al vigilante». Existen auditorías de la gestión económica, pero no una evaluación generalizada de los resultados, más allá de los rankings. Hay consenso en que el entramado de intereses particulares se reduciría con una verdadera rendición de cuentas. El impulso a la financiación por resultados aparecía en el informe de Wert, se hace en Cataluña y lo piden los rectores. Está por ver qué hará Castells.